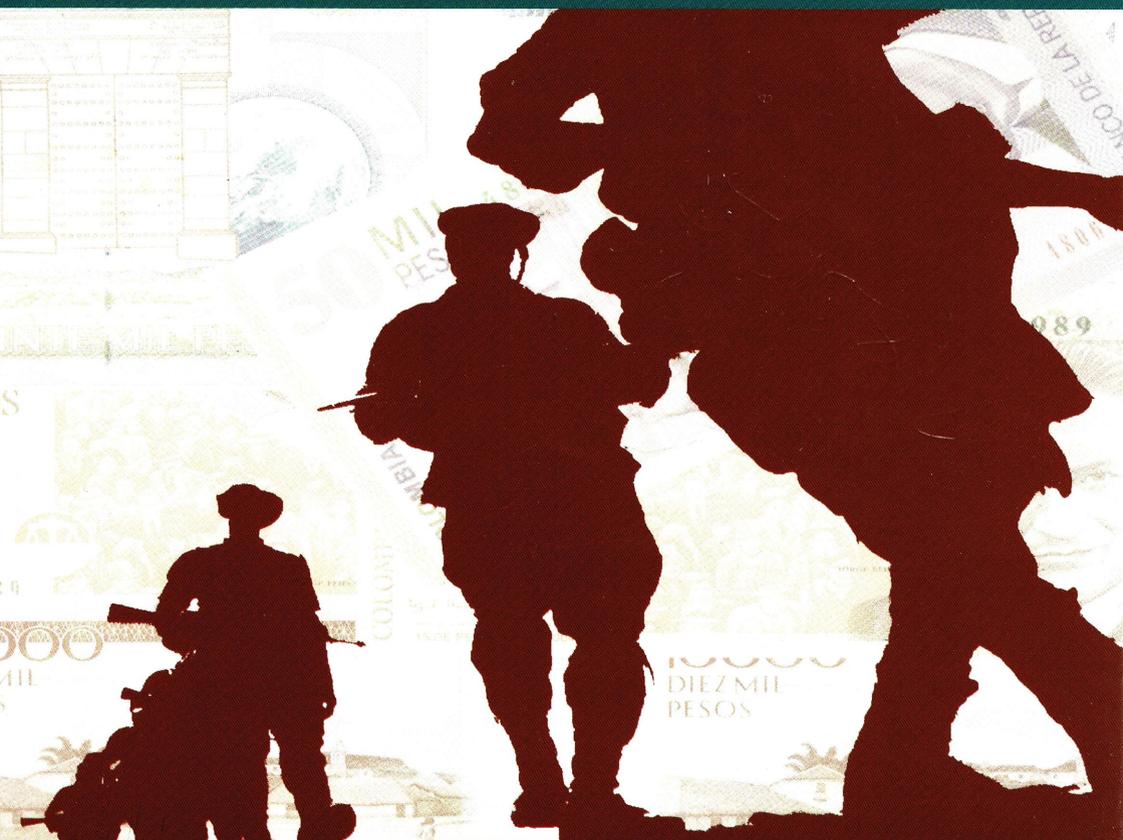


ALFREDO RANGEL

Edición y prólogo

2ª EDICIÓN

# EL PODER PARAMILITAR



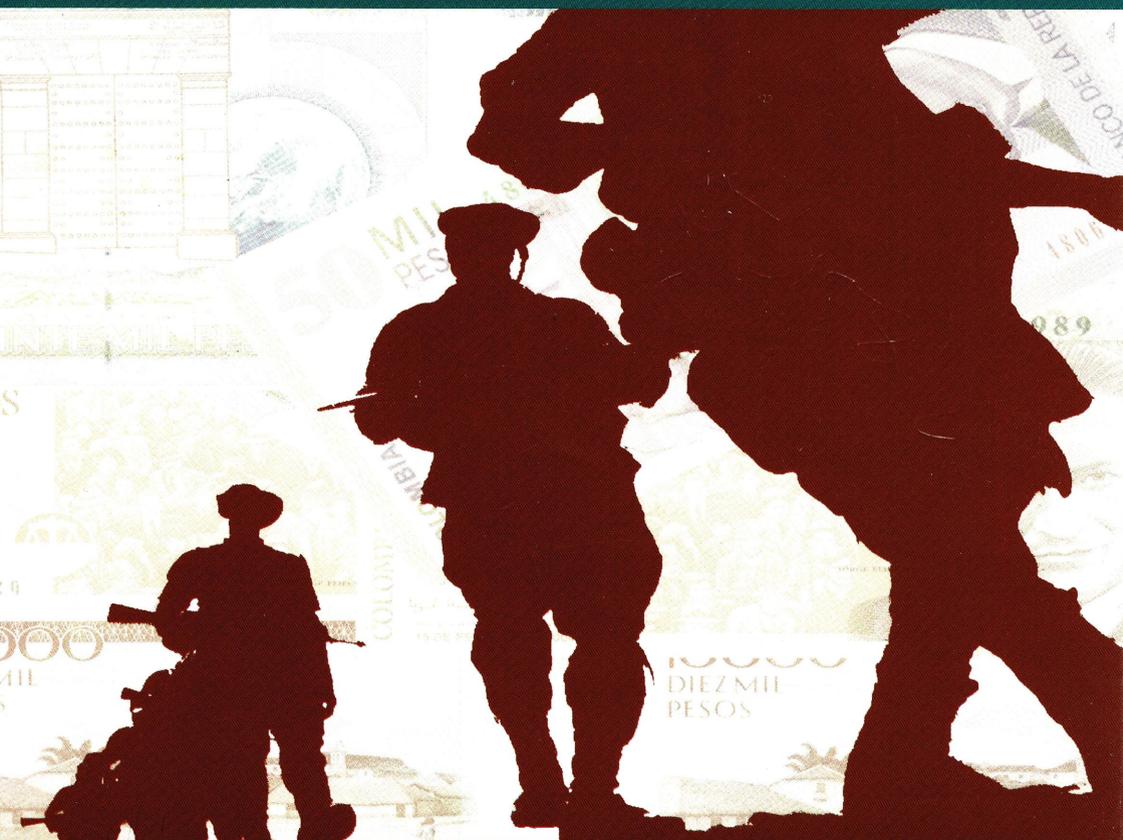
William Ramírez Tobón \* Juan Carlos Garzón  
Stathis Kalyvas \* Ana Arjona  
Fidel Cuéllar Boada \* Fernando Cubides Cipagauta

ALFREDO RANGEL

Edición y prólogo

2ª EDICIÓN

# EL PODER PARAMILITAR



William Ramírez Tobón \* Juan Carlos Garzón

Stathis Kalyvas \* Ana Arjona

Fidel Cuéllar Boada \* Fernando Cubides Cipagauta

### ALFREDO RANGEL SUÁREZ

Economista y politólogo. Actualmente es director de la Fundación Seguridad y Democracia. Autor de los siguientes libros: *Colombia: guerra irregular en el fin de siglo*, Tercer Mundo, 1998; *Guerra insurgente. Conflictos en Malasia, El Salvador, Perú, Filipinas y Colombia*, Intermedio Editores, 2001; *Guerreros y políticos. Diálogo y conflicto en Colombia 1998-2002*, Intermedio Editores, 2003.

### WILLIAM RAMÍREZ TOBÓN

Sociólogo e historiador. Como investigador y ensayista es autor de los siguientes libros: *Historia de la producción, producción de la historia*, Cinep, 1981; *Estado, violencia y democracia*, Tercer Mundo, 1990; *Los inciertos confines de una crisis*, Planeta, 1997; *¿Para qué sirve Europa?*, Planeta, 2003.

### JUAN CARLOS GARZÓN

Politólogo. Investigador asociado de la Fundación Seguridad y Democracia. Autor de *Dinámica reciente de la confrontación armada en Cundinamarca*, 2005.

### STATHIS KALYVAS

Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Yale.

### ANA ARJONA

Economista. Candidata a doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Yale.

### FIDEL CUÉLLAR BOADA

Economista y administrador de empresas. Autor del libro *El crédito cafetero en Colombia. Economía, instituciones y política (1920-2002)*. Universidad Nacional de Colombia y Universidad de los Andes, 2004.

### FERNANDO CUBIDES CIPAGAUTA

Sociólogo y politólogo. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Autor del libro *Burocracia armada*, Norma, 2005.

# E

l paramilitarismo en Colombia es resultado de una crisis política y militar del Estado colombiano, del auge de la guerrilla y de la persistencia del narcotráfico. Los grupos paramilitares son contrainsurgentes, civiles, autónomos del Estado, están fuertemente penetrados por el narcotráfico y tienen estructuras muy complejas.

Estas características hacen incierta su desmovilización y justifican las dudas sobre la eficacia de los esfuerzos gubernamentales para desmontar su poder económico, político y social. De todas formas, será inevitable que su reinserción social tenga un alto costo en términos de justicia, de verdad y de reparación, para poder avanzar en la solución de nuestro conflicto armado y allanar el camino hacia la paz.

Los ensayos que integran este volumen examinan desde distintos ángulos la realidad del fenómeno paramilitar en Colombia y los retos de su desmovilización.

*Tomado del prólogo de Alfredo Rangel*



## Índice

### PRÓLOGO: ¿ADÓNDE VAN LOS PARAMILITARES?

<i>Alfredo Rangel</i> .....	11
-----------------------------	----

### PARAMILITARISMO: UNA PERSPECTIVA TEÓRICA

<i>Stathys Kalyvas y Ana Arjona</i> .....	25
Introducción .....	25
Cuestiones conceptuales y definición .....	26
Una tipología del paramilitarismo.....	31
Paramilitares y construcción del Estado .....	34
Implicaciones para la desmovilización .....	39
Conclusión .....	40
Bibliografía .....	41

### LA COMPLEJIDAD PARAMILITAR: UNA APROXIMACIÓN ESTRATÉGICA

<i>Juan Carlos Garzón</i> .....	47
El análisis de un fenómeno complejo .....	47
La complejidad del fenómeno paramilitar vista desde las rupturas estratégicas .....	52
Las estructuras paramilitares de hoy .....	83
Las implicaciones estratégicas de la negociación desde la perspectiva militar .....	93
Las estructuras dominantes y el dispositivo paramilitar actual .....	115
A modo de conclusión.....	129
Bibliografía .....	131

## AUTODEFENSAS Y PODER LOCAL

<i>William Ramírez Tobón</i> .....	137
Presentación .....	137
¿Con quién se está negociando?.....	140
La autodefensa como síntoma.....	154
La territorialización privada y el poder local en las autodefensas .....	170
Economía de guerra y poder local.....	181
Negociaciones y poder local .....	191

## NARCOTRÁFICO Y PARAMILITARISMO: ¿MATRIMONIO INDISOLUBLE?

<i>Fernando Cubides Cipagauta</i> .....	205
La sabiduría convencional.....	205
La secuencia .....	211
Un caso regional: el Cesar .....	219
Un conglomerado urbano: Barrancabermeja .....	223
La intrincada trama en el norte del Valle.....	225
El mosaico regional.....	231
Mirando el organigrama: fragmentación, recomposición .....	238
La desvalorización de la ley .....	241
Hacia el futuro: de lo militar y lo político.....	246
Anexos.....	255
Bibliografía .....	257

## LA NEGOCIACIÓN CON LOS PARAMILITARES DESDE LA TEORÍA DE JUEGOS

<i>Fidel Cuéllar Boada</i> .....	261
Introducción .....	261
Algunos conceptos elementales de teoría de juegos .....	262
Las FARC.....	265
Paramilitares.....	290
El alcance de la amenaza terrorista al final de la negociación .....	307
Conclusiones .....	322
Bibliografía .....	327

# Narcotráfico y paramilitarismo: ¿matrimonio indisoluble?

FERNANDO CUBIDES CIPAGAUTA

## La sabiduría convencional

Desde 1989 cuando se filtró a la prensa el primer análisis de conjunto por parte de una agencia gubernamental colombiana, en ese caso el DAS, acerca del paramilitarismo como fenómeno en expansión, el nexo con el narcotráfico era tan obvio que para efectos de las conclusiones se lo dejaba sobreentendido. El nexo en cuestión operaba como un presupuesto a lo largo de ese análisis de inteligencia que, en la forma en que se divulgó, para el lector común o profano, venía siendo «todo lo que usted quería saber sobre el paramilitarismo y no se había atrevido a preguntar». Se aportaban indicios y evidencias anecdóticas si bien a todas ellas les faltaba un largo trecho para llegar a ser pruebas judiciales, de hecho la mayoría de las sindicaciones no prosperaron en dicha dirección<sup>1</sup>. Con pos-

<sup>1</sup> «El dossier paramilitar» *Semana* revela documentos secretos del Gobierno sobre cómo son, cómo actúan y quiénes financian a los grupos paramilitares», *Semana*, edición N.º. 362, 11/17 de abril de 1989, pp. 22-34.

terioridad, en la secuencia de entrevistas, más o menos resonantes que se han ido haciendo a uno u otro jefe paramilitar a medida que el fenómeno se expande, la pregunta ha sido inevitable, y la respuesta, exculpatoria, «diplomática», de manera invariable parece responder a un libreto aprendido, y dice aproximadamente así: siendo una realidad económica protuberante en las zonas donde actuamos, y teniendo que enfrentar a la guerrilla cuyo esfuerzo bélico se financia en mayor medida con los tributos que recauda de cultivadores, de comerciantes de pasta-base y de narcotraficantes, hacemos lo correspondiente. Aun el más vehemente de los entrevistados, Carlos Castaño, en varias de las entrevistas y en su libro auto-reportaje, a ciencia y paciencia del volumen de pruebas que obraba en contra de su hermano Fidel por tráfico de drogas, y habiendo relatado de manera prolija, y aportando documentación irrefutable, su papel como informante en Los Pepes (como se sabe una escisión del cartel de Medellín, que para luchar contra Pablo Escobar estableció alianzas con el cartel de Cali, y cuya acción fue clave en la eliminación del capo) allí mismo insiste en el argumento, todo un argumento para consumo externo. En alarde de imitación, tal argumento, en sus versiones más elaboradas adquiere la connotación de «lo social»: junto con estimativos propios según los cuales 70% de los costos de su guerra se financia con dinero de la droga, paso a paso repite las alusiones de la guerrilla a los problemas de subsistencia de los campesinos o colonos cultivadores de coca o de amapola, acompañadas de estimativos sobre el número de personas dedicadas al cultivo, distribución de la tierra, precios de productos normales, distancia al mercado, etc.

En su esfuerzo por desenredar la urdimbre de nexos entre el narcotráfico como actividad económica ilegal y el propósito de incidir en los niveles local regional o nacional de los sistemas políticos por parte de las organizaciones que lo practican, así como el tipo de recurso a la violencia en uno u otro caso y lo diferenciado de sus efectos sociales, en el plano más universal, una corriente de investigación procura distinguir analíticamente y sobre la base de modelos universales una «lógica del mercado» de una «lógica del poder»<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ver «Poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana», de Cam Krauthausen en la revista *Nueva Sociedad*, N.º 130, 1994, pp. 112-125. En mi apreciación Krauthausen es quien mejor se ha adentrado en la constelación de redes del narcotráfico, y quien mejor ha interpretado sus alcances, gracias a una comparación metódica

Recapitulando la etapa más reciente y los principales hechos del narcotráfico en Colombia, ese enfoque resulta del todo aplicable; a condición, claro, de no hacer de la distinción analítica una disociación, y de estar atentos para captar el aprendizaje y las transformaciones que va induciendo a través del tiempo, atentos por ende a la dinámica de un tipo peculiar de confrontación.

En un primer momento la percepción que se tenía del narcotráfico llegó a ser permisiva, pues tendía a pensarse que los objetivos de quienes se dedicaban a él era el enriquecimiento privado; más adelante, cuando existían ya organizaciones complejas, volúmenes considerables y ritmos de acumulación ostensibles (se aplicaba ya por entonces la metáfora judicial de los carteles de Medellín, de Cali) y por parte de la organización de Pablo Escobar se dio paso a una confrontación directa mediante asesinatos y secuestros selectivos y acciones terroristas en escenarios urbanos, hizo carrera la contraposición entre las dos organizaciones más grandes y pareció tener sentido el matiz que consideraba a los narcotraficantes de la organización liderada por los Rodríguez Orejuela de corte empresarial, pacifista en sus métodos, que privilegiaban el soborno y la cooptación, determinada por la lógica del mercado, que no pretendía por ende confrontar al Estado, y la de Escobar, quien se autodefinía como «un guerrero». En cuanto se tuvo acceso al «expediente Pallomari» y por ende a un relato pormenorizado del organigrama de Cali, sus componentes

---

empíricamente fundada, como se puede ver en su tesis doctoral: *Padrinos y mercaderes. Crimen organizado en Italia y Colombia*, Espasa, Hoy/Planeta Colombiana, Bogotá 1998, un libro que no ha tenido la recepción que se merece en parte por las ambigüedades del formato editorial. Por lo demás, en teoría el problema es clásico y desde antes de Marx. Con posterioridad a él, bastaría mencionar a su principal «revisionista»: Weber. ¿No es acaso el sociólogo alemán quien advierte: «Ha sido siempre la consecución de poder económico lo que ha hecho surgir en una clase la idea de su candidatura a la dirección política. Es peligroso y a largo plazo inconciliable con el interés de la nación el hecho de que una clase económicamente en decadencia detente el poder político. Pero todavía es más peligroso el hecho de que las clases hacia las cuales se desplaza el poder económico, y con ello la perspectiva de poder político, no estén aún políticamente maduras para la conducción del Estado?». En el caso colombiano, el peligro, más aún, la fatalidad, ha consistido en la magnitud del poder económico que una actividad ilegal como el narcotráfico genera, y que, dado que es ilegal, sólo puede proyectarse a la política mediante la corrupción o la violencia.

y ramificaciones, por parte de un testigo de primera fila, la percepción tuvo que cambiar pues bajo el rótulo «seguridad», en su expresión más corporativa y contable, aparecían una gama muy variada de actividades y muy diversas modalidades de recurrir a la violencia. Las que incluían acciones que sin ninguna duda y bajo cualquiera de las definiciones al uso tendrían que calificarse de terroristas, como el atentado al edificio Mónaco, ya en enero de 1988.

Parte del ovillo se ha ido desenredando, y hoy sabemos más de la estructura de las organizaciones de narcotraficantes, de sus fines, de la clase de medios a los que suelen acudir, la «lógica del mercado» ha sido descifrada en lo sustancial. Los golpes en contra de las organizaciones de Cali y Medellín, las evidencias que afloraron y que son acopiadas en los expedientes judiciales dejan claro para el observador de hoy que se hizo un uso muy elástico de la metáfora judicial al llamarlos carteles y que se trataba de núcleos organizativos que en aras del negocio entablaban alianzas circunstanciales para despachar droga o enfrentar enemigos comunes. Pero a la vez sacaron a la luz que para quienes estuvieron en la cúpula era clara y muy fluida (así fuera como posibilidad hacia adelante) la secuencia poder económico-protección-extorsión-control territorial-poder político. Los nexos directos con las estructuras del paramilitarismo, sus objetivos políticos a mediano plazo, los componentes de la «lógica del poder», se van configurando en forma paulatina pero su relación con la droga sigue estando en cambio en una semipenumbra y no en menor medida porque el actual proceso de negociación tenga como uno de los supuestos, para hacerlo presentable nacional e internacionalmente, que en cuanto a su participación en el narcotráfico se trata de una actividad conexas pero subsidiaria.

A conciencia de lo deslizante del terreno, procuraremos aquí explorar esos nexos sobre la base de las evidencias accesibles, cómo y con cuáles alcances se entrecruzan dichas «lógicas» en el contexto del prolongado e intrincado conflicto colombiano: el poder económico que el narcotráfico ha hecho posible y la clase de intereses que genera, la relación que se pueda establecer entre los agentes de la constelación de intereses particulares de ese poder económico con la federación de grupos regionales en que se ha configurado el fenómeno paramilitar y que es la forma en que ha llegado a la mesa de negociación. Acerca del nexo en cuestión

son múltiples las presunciones, muchas las denuncias y es persistente el supuesto, no es sin embargo algo autoevidente; de una manera paradójica, la literatura que se propone examinarlo sobre un cúmulo representativo de evidencias es exigua. Todavía hay excelentes trabajos acerca de la implantación del paramilitarismo en una región concreta, veraces hasta el detalle, empíricamente fundamentados e ilustrativos acerca del modo en que se ejerce el poder local y regional una vez conquistado, pero que se dan el lujo de omitir cualquier referencia al narcotráfico.

Si en cuanto a los paramilitares el intento de imitación es consciente, y para cualquier observador sobresale el intento de replicar estructuras, orientaciones estratégicas y tácticas de la guerrilla, las diferencias persisten. La principal de las diferencias no está en el dispositivo, en las modalidades de combate sobre el terreno, sino en un intangible: el grado de convicción de sus tropas, el adoctrinamiento y el entrenamiento que reciben. Para el caso de los paramilitares se hace presente la laxitud en los criterios de reclutamiento, el escaso nivel de convicción y de formación de sus efectivos, mucho más cerca del soldado de fortuna o mercenario que del combatiente político.

Tengamos en cuenta eso sí que narcotráfico es una expresión genérica que engloba a una pluralidad de agentes individuales, la mayoría de los cuales, por cierto, opta por pasar desapercibidos, sólo hace un uso instrumental de la violencia con fines privados y de ajuste de cuentas y elude la confrontación más amplia. Una teoría conspirativa de la historia nos diría que la guerra, su irregularidad, su duración, le conviene al negocio, lo cual es inobjetable; deducir de allí que la participación en ella de los narcotraficantes es premeditada y coordinada, como acción colectiva que se produce al unísono, es incongruente. Como lo señalan los testimonios, dicha participación se va dando inductivamente, es un involucramiento progresivo y en contextos muy definidos. A estas alturas puede decirse que hay trayectorias bien documentadas y emblemáticas, como la de Pablo Escobar. El recuento de sus móviles declarados y el cotejo con las evidencias es significativo y nos indica la tendencia; sus primeras redes son las del compadrazgo y el vecindario, su grado de asociación episódico y en función del negocio, el objetivo señalado, el logro de la impunidad que le posibilitará el disfrute de lo acumulado. Por más «guerrero» que se declarara, en su confrontación apenas rebasó la defensa de su interés

particular y en forma muy ocasional, de grupo. En el mejor de los casos sería, siguiendo a Hobsbawm, Meertens & Sánchez, un «bandido social» o un «bandido pre-político». Pocos episodios delatan su prisa, la ausencia de objetivos de mediano plazo y de una visión de conjunto de la actividad económica a la que estuvo ligado, la impostura de los fines sociales que alegaba, como su proclamado intento de crear de la noche a la mañana un grupo guerrillero, «Antioquia Rebelde», en carta al procurador. En su carrera encontramos toda la gama, del clientelismo al terrorismo, la más errática combinación de formas de lucha, sin que lograra disfrazar jamás el predominio de sus intereses individuales.

Y la de Escobar es una lección que resulta aprendida por la siguiente generación de narcotraficantes, participar en la guerra obteniendo dividendos requiere un esfuerzo más metódico, transar los intereses individuales, trascender el regionalismo, propiciar grados de asociación duraderos, y, en fin, entrar en sintonía con intereses locales y regionales distintos a los del negocio. Errático e intemperante en muchas de sus decisiones, vehemente y desaforado, Carlos Castaño durante el tiempo que apareció al frente de la organización paramilitar demuestra no obstante haberse guiado por un rudimento de estrategia, de sentido del largo plazo, una visión más compleja de la naturaleza de la guerra irregular, revela ser «un guerrero» con disposición de echarse el morral al hombro, consciente de que la guerra irregular no puede ser una guerra por intermedio de otros, una guerra por procuración, y que una vez comenzada absorbe toda la energía de quien se embarca en ella. Con todas sus imposturas y lo delirante de muchas de sus formulaciones, es inocultable que Castaño llegó a adquirir un valor simbólico para muchos de sus subordinados y seguidores pues encontró en la guerrilla un enemigo real, su motivación inicial era genuina, existencial. A partir de ahí fue buscando sintonizarse con quienes en su entorno social percibían la amenaza, en ese contexto sus llamados a una clase media rural y al conjunto de los propietarios no pueden ser calificados de delirantes.

Sin desestimar los relatos testimoniales y la literatura periodística que se ha venido publicando, bien cribados, en el recuento histórico de lo que se trata es de establecer el momento en el que la agregación de intereses particulares da forma a un interés de grupo y a una proyección a la política, en que quienes aparecen al frente de la estructura paramilitar

se proponen capitalizar los dividendos de una sucesión de acciones locales y regionales y plantarse en un ámbito nacional adoptando de modo más decidido un modelo de guerra irregular, con todas sus consecuencias y con un barniz de orden. Una escueta mirada retrospectiva nos informa que ya con ello lo que han logrado es mucho, si se tiene en cuenta que hasta hace poco la discusión era acerca de si se otorgaba o no el estatus político, el viraje es indudable. Si todavía se niega ese carácter es por un cierto formalismo jurídico, pues para todos los demás efectos se los considera interlocutores válidos y se está reconociendo el poder que detentan. En un plano más general, el interrogante básico es entonces hasta dónde es posible discernir una estrategia en su sentido más estricto, es decir, establecer una relación entre las acciones militares y el objetivo político que se han trazado quienes actualmente están en la cúpula del organigrama paramilitar y actúan como voceros y negociadores. Dada la inveterada y explicable dificultad de acceder a información sistemática y confiable, en lo analítico el principal riesgo es abusar de la inferencia a partir de hechos fragmentarios, incurrir en especulaciones no fundadas, forzar las evidencias existentes. Las dificultades son, pues, conocidas, las disculpas también.

### La secuencia

En un primer momento, la propuesta de iniciar un proceso de negociación con los paramilitares pareció irrealizable en la práctica, un exabrupto. A un analista tan diestro y un conocedor de la situación colombiana de tanta trayectoria como Daniel Pécaut, los hechos asociados, la disminución de acciones violentas por parte de los paramilitares en los primeros meses del gobierno Uribe se le antoja «una evolución sorprendente», así como considera una «grave asimetría» que genera nuevos interrogantes, en lo que daba la impresión de una acción concertada con anterioridad, el inicio de conversaciones con los paramilitares en condiciones en que no se vislumbra ninguna posibilidad de que existan con la guerrilla<sup>3</sup>. No era el único sorprendido, desde luego, a la casi totalidad de los ana-

---

<sup>3</sup> En su libro *Midiendo fuerzas-Balance del primer año del gobierno Uribe*, Bogotá, Ed. Planeta, pp. 133 y 137.

listas, y a la opinión pública en general el anuncio los tomó por sorpresa. Las señales se habían venido produciendo de manera intermitente y un tanto imperceptible. Con lo acelerado del crecimiento del dispositivo paramilitar y la capacidad de encuadrar grupos locales y regionales muy heterogéneos se hacen más notorias las fisuras, las disensiones, como si hubieran podido constatar los límites de su propio crecimiento y los riesgos del desborde en un contexto internacional cada vez más desfavorable. Eludiendo la fácil tentación del «predecir el pasado», una mínima recapitulación de las acciones y declaraciones más significativas en la etapa reciente para discernir su sentido, parece inevitable. Y arroja una constatación provisional: la inclusión en la lista de organizaciones terroristas por parte de los Estados Unidos en septiembre de 2001 hace mella en la cúpula paramilitar, y a ella le sigue a la serie de recriminaciones mutuas entre algunos de sus líderes respecto, precisamente, de sus mayores o menores vínculos con el narcotráfico. (El zig-zag se hace patente en septiembre de 2002: acusaciones del desaparecido Bloque Metro a Castaño por vínculos con el narcotráfico, de Castaño a Ernesto Báez y Javier Montañez del Bloque Central Bolívar, por lo mismo, propuesta de disolución, amagos de renuncia –por momentos el panorama llegó a ser el de una descomposición acelerada– seguido de la decisión de reasumir la dirección política y luego de reestructurar el Estado mayor). Y siempre en cada uno de los momentos de crisis la acusación de vínculos con el narcotráfico y la consiguiente amenaza de extradición gravitando de una manera determinante.

Para quien examine el asunto a cierta distancia, aun sin información precisa, el enunciado podría formularse, por deducción, de otra manera: solo un negocio con la rentabilidad del narcotráfico permite poner en pie, y funcionando, con la celeridad que se hizo, una organización militar con tal número de efectivos y con presencia en un territorio tan variado. Al igual que aquellos planetas cuya existencia la deducen los astrónomos por la forma en que alteran el curso de los circundantes, el narcotráfico es el gran tema de la agenda oculta, que en la mesa de negociación gravita sobre todos los demás, aunque no se mencione.

Una expansión tan rápida como la que se llevó a cabo en el cuatrienio anterior tiene sus costos y cualquier estructura organizativa, por dúctil que sea, registra tensiones; más aun una estructura improvisada que no

cuenta con la línea de mando reconocida. Parte del crecimiento se debió a la capacidad de expandirse y adaptarse a regiones muy diversas, en todas ellas presentes coca y amapola, susceptibles por ende de una recaudación, pero la variedad en las fuentes de financiamiento en las alianzas regionales no es incondicional, de un modo correlativo sus contraprestaciones son otras tantas demandas al nivel central. Por muy sutil que sea la trama de las alianzas regionales, el hecho de que sea una alianza entre competidores en un mercado ilegal la hace frágil. Las tendencias centrífugas se hacen manifiestas y ante ellas la salida más ingeniosa tiene los visos de una «fuga hacia adelante», posturas inesperadas como una declaratoria de cese al fuego unilateral que se ajusta a una de las exigencias del candidato triunfador, seguida de varias declaraciones de voluntad de negociar y algunos aprestos en esa dirección: reagrupamientos, concentraciones, reorganización del dispositivo central.

Ahora bien, para el analista el monto, un estimativo acerca de lo que aporta el negocio de las drogas al financiamiento del aparato bélico paramilitar, sigue vedado. Por ahora es inescrutable, salvo deslices puntuales<sup>4</sup>. Pero una variedad de observaciones directas sobre el terreno, lo constata. Recapitulando el origen de los diversos grupos que actualmente conforman el organigrama paramilitar, puede decirse que en la mayoría de ellos no aparece el narcotráfico en su surgimiento, pero aun ellos, a medida que se implantan y conforman «nichos de seguridad», tienden a convertir sus zonas en atractivas para la inversión de capitales del narcotráfico. En todo caso, en la medida en que el tributo que exigen es más

---

<sup>4</sup> En la primera de una serie de entrevistas que llegan a convertirlo en una celebridad mediática, y cogido a contrapié, Carlos Castaño afirma que el tributo obtenido al mes en pesos de 2000, para una zona que tenía cultivadas 5.000 hectáreas, en La Gabarra y San Lucas, es de 600 millones. Citado en «Narcotráfico y guerra en Colombia: los paramilitares» artículo del libro *Violencia y estrategias colectivas en la región andina*, IFEA & Norma, Bogotá, 2004, p. 401, En cuanto al número de efectivos, una cifra redonda con la que se trabajó en el primer encuentro de Santa Fe de Ralito fue la de 19.000 hombres «Según la oficina del Comisionado de Paz el reintegro a la vida civil de los primeros 13.000 parás costaría unos 208 millones de dólares a razón de 16.000 dólares por cabeza para los dos años que se necesitarían para la reinserción efectiva. Eso, sin contar lo que costarían los del Bloque Central Bolívar (4.000) y los de Alianza Oriente (2.000) que están en mesas paralelas»: «Con el proceso que arrancó el martes Uribe se juega su estrategia de seguridad», *El Tiempo*, 20 de julio de 2003, p. 1-2. La cifra se ajustó luego a 20.000, que es la que se ha empleado hasta ahora.

predecible, narcotraficantes medianos y pequeños tienden a establecer con los grupos ya formados una relación instrumental.

Tal vez no sea posible hacer todavía un ejercicio como el que se ha hecho para las FARC: un estimativo del peso específico del dinero de la droga en sus finanzas, a partir de la información sobre áreas de cultivo en las regiones en donde ejerce un ostensible control territorial, posibilitado por el hecho de que su crecimiento al fin y al cabo ha sido más gradual, por ende predecible, y hay más consonancia entre las regiones de implantación y las regiones a donde se expande. Y desde los primeros intentos de negociación entre 1982 y 1986, hasta el «despeje» durante el cuatrienio Pastrana, recorridos en varias direcciones por sus regiones de implantación, recuentos poblacionales, un cúmulo de entrevistas y monografías regionales fueron sumando información. Durante varios años fue posible compilar información precisa por unidad de producción, hacer estimativos de buen nivel de exactitud sobre el área cultivada en una región circunscrita, obtener testimonios directos de comandantes guerrilleros acerca del «gramaje», la forma de calcularlo e, incluso, para un producto agrícola como la coca, típicamente de «ciclo corto», tener en cuenta las variaciones de precios de los insumos, y las variaciones estacionarias. Puede decirse que la investigación de campo con instrumentos etnográficos había acumulado ya la masa crítica de información que posibilitaba a economistas y analistas de estrategia construir sus estimativos sin elucubraciones o distorsiones significativas.

Respecto de los paramilitares, aparte de que su crecimiento ha sido más rápido y, por así decirlo, desordenado, como lo constató directamente el periodista Bernard-Henry Levy en su visita al campamento del Nudo de Paramillo, no es un tema que se preste para una respuesta distensionada, indagar sobre él produce la mayor prevención en el entrevistado<sup>5</sup>. Si las monografías regionales consultables o la observación directa sobre el terreno comprueban que donde quiera que se ha logrado implantar hay inversión de capital del narcotráfico o cultivo y procesamiento inicial de pasta base o de goma de opio, además de lo difícil y riesgoso de obtener

---

<sup>5</sup> La crónica, muy incisiva y parte de una serie sobre «Las guerras olvidadas», apareció en *Le Monde*, junio 2 de 2001. Fue publicada en versión española por la Revista Dominical de *El Espectador*, y como uno de los capítulos del libro de Levy: *Reflexiones sobre la guerra, el mal, y el fin de la historia*, Ed. Punto de Lectura, Madrid, 2003.

la comprobación del vínculo directo o «prueba reina», la incógnita complicada de despejar en esa ecuación, es la de la superficie sobre la que se recauda el tributo, o el tipo de contribuciones que reciben bajo el rubro de «seguridad»<sup>6</sup>. A lo más que llegan, cautos, sus abogados y voceros oficiosos es a admitir como hace uno de los más cercanos: «Las AUC empezaron cobrando el impuesto de gramaje a los narcotraficantes, y reconocen que *algunos de sus frentes* se han financiado con el tráfico de drogas» (subrayado nuestro). Allí mismo y a una pregunta directa, la representante Rocío Arias responde y acota, a la defensiva: «No tengo conocimiento de que las autodefensas se dediquen al narcotráfico. Eso no lo ha podido probar el Gobierno»<sup>7</sup>. Aleccionados por el impacto negativo que tiene un reconocimiento escueto sobre el narcotráfico, siendo conscientes de la pérdida de credibilidad que entraña para cualquier otra causa, habiendo sopesado lo que implicó para la guerrilla en materia de credibilidad y todas sus otras implicaciones, se han hecho diestros en camuflarla como actividad, y es casi un tic, un reflejo adquirido, eludir el cargo, atribuirlo a otros, así fuere a sus propios compañeros de organización. Hasta donde podemos discernirlo, y sin atropellar demasiado la lógica formal, el nexos se podría formular así: no todos los narcotraficantes son paramilitares, pero invariablemente, todos los paramilitares tarde o temprano tienen nexos con el narcotráfico. Y la conclusión es válida, como trataremos de verlo más adelante, si se estiman los costos de funcionamiento de un aparato de

---

<sup>6</sup> No por falta de intentarlo: el ejercicio se ha hecho a partir de la información accesible, pero no arroja estimativos claros. Ver por ejemplo el apartado «Algunas anotaciones sobre las fuentes y sus limitaciones» del capítulo «Algunos indicadores sobre el accionar de las autodefensas» en *Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 1998-2002*. Vicepresidencia de la República. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Bogotá, julio de 2002, donde se señala para comenzar como uno de los inconvenientes el subregistro: «Un análisis de la información consultada, evidente sobre todo en las fuentes gubernamentales y estatales, permitió establecer que la mayoría de los hechos en que incurren las autodefensas y afines son atribuidos a desconocidos» (*op. cit.*, p. 44). También: «El atlas de la guerra. Con la ayuda de expertos, *Cambio* analiza quién avanza y quién retrocede en las siete regiones claves del conflicto», revista *Cambio*, N.º. 572, 14 de junio de 2004, en donde se da cuenta de la dinámica del conflicto y se procura medir su intensidad, que es tal en algunas regiones en donde están presentes ambos actores (Sierra Nevada, Magdalena y Cesar) que no es posible establecer una correlación entre guerrillas o paramilitares y cultivos ilícitos.

<sup>7</sup> «La propuesta de las auc» en revista *Cambio*, 7 de julio de 2003, pp. 19 y 22.

guerra como el que han construido. Pero respecto de la primera premisa, una conclusión comprobada en los hechos es que no solo no todos los narcotraficantes son paramilitares, sino que ciertos narcotraficantes han establecido acuerdos con grupos guerrilleros; llevados por el pragmatismo, evaluando los contextos regionales. Acuerdos en función de seguridad, de compartir rutas, de disputar con un competidor un territorio. Como se infiere del «Expediente Pallomari», incluso los Rodríguez Orejuela, como un recurso más y contemplando algunas eventualidades, drenaban recursos hacia grupos guerrilleros locales.

Y por otra parte, si algo defectuoso tenía el proyecto de ley que en 2003 presentara el entonces ministro Fernando Londoño Hoyos «Por el cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional» (*Gaceta del Congreso* 436; agosto 27 de 2003) era no la igualación, por lo más ancho, sin más, de guerrillas y paramilitares bajo el más genérico de los rótulos «grupo armado organizado», sin dar cuenta de sus diferencias, sino sobre todo que hacía abstracción por completo de cualquier referencia a las actividades delincuenciales asociadas, sobre todo al narcotráfico, y terminaba por ello subsumiéndolo en el delito político, y finalmente, sea que se lo propusiera o no, otorgándole impunidad.

Y ya haciendo un seguimiento de las fases que se señalan para el proceso, lo que se observa es que tras la salida a la superficie de diferencias que habían permanecido ocultas, y la desaparición –real o virtual– de Carlos Castaño, las expectativas de la negociación van induciendo una mayor cohesión en los paramilitares. De hecho se apresuran a acoger una de las recomendaciones de la comisión exploradora para que haya «una sola mesa». Y al sumarse de lleno Ernesto Báez a la negociación, adquiere vehemencia y reiteración el argumento de que la «narcotización» es del país, como lo señala una excelente crónica ya en mayo de 2004<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> «Dicen que el narcotizado es el país, no solo ellos. Borre el narcotráfico y quedamos reducidos a 1981: once frentes de las FARC, tres o cuatro del ELN y unos cuantos autodefensas», ver la crónica de Luz María Sierra y Álvaro Sierra «Un día en el corazón de las AUC» en *El Tiempo*, 16 de mayo de 2004, p. 1-6, que describe una jornada típica en la mesa de conversaciones, con la presencia del grupo de 33 comandantes que funge como dirección colegiada.

Nuestra capacidad para sorprendernos con las metamorfosis individuales y grupales en el abigarrado espectro ideológico que abarca las diversas posiciones en el conflicto armado colombiano parecía colmada cuando hizo su aparición Carlos Alonso Lucio, antiguo guerrillero del M-19, ex parlamentario y secuestrado por Carlos Castaño y su grupo, devenido ahora en asesor de primera línea de los paramilitares. Sus declaraciones se producen en uno de los momentos de atascamiento de las conversaciones y son importantes y representativas en cuanto a la lógica económica que subyace al proceso en dos direcciones: la primera en cuanto corrobora las intuiciones y apreciaciones previas acerca del costo promedio por combatiente para cada uno de los frentes que se hallan negociando y colateralmente acerca del tipo de combatiente con que cuentan y con el tono de quien sabe bien de qué habla y conoce a fondo el mercado al cual se está refiriendo:

Es necesario entender la diferencia entre un guerrillero y un patrullero de las autodefensas. El guerrillero dice «yo milito en las FARC». El patrullero dice «yo trabajo en las AUC». No es un convencido ideológico sino parte del mercado laboral de la violencia. Por eso es mejor recogerlos que dejarlos en ese mercado donde seguramente se venderán al mejor postor.

La segunda, y más importante, invocando el principio de realidad, apunta al pie del cual ha cojeado el Estado colombiano en cada uno de los procesos de reinserción que han sido la obsolescencia del catastro aunada a la lentitud e ineficiencia del sistema judicial y de las dependencias administrativas que han de apoyarlo cuando se trata de la extinción de dominio o de las medidas análogas que apuntaron a lo que hoy se denomina la reparación a las víctimas:

Lo que es una utopía es pensar que es fácil la extinción de dominio en las zonas rurales de Colombia. Si con Pablo Escobar muerto ha tomado casi 20 años extinguir el dominio del edificio Mónaco, símbolo del poder del capo, en pleno centro de Medellín, imagínense ustedes lo que será determinar qué es de quién en Córdoba, el Magdalena Medio, sur de Bolívar, Cesar, y hasta la Orinoquia. Mucho más realista es escucharles a ellos su propuesta de entregar enormes extensiones de tierra cultivables y cuantificar los recursos que estarían dispuestos a invertir<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> «La oferta de los paras. El ex guerrillero Carlos Alonso Lucio, hoy principal asesor de las autodefensas, destapa las cartas de las AUC en la negociación», en *Semana* octubre 18 de 2004, pp. 27 y 30.

Un investigador que se pasase de inquisitivo podría encontrar en esa referencia por parte del asesor principal a las vicisitudes de la extinción de dominio, como argumento negociador, un tácito reconocimiento de la importancia del dinero del narcotráfico en el patrimonio adquirido y como sustrato de la acción bélica de sus asesorados.

En todo caso, en cuanto a las dificultades, en efecto, examinando otras fuentes, se advierte que sigue siendo enorme la brecha entre lo que la investigación académica, apoyada en información de agencias gubernamentales, establece como superficie de tierra en poder de narcotraficantes y lo que aportan los organismos concernidos, en este caso la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, aun concediendo que ha habido una mejora sustantiva en los últimos años, acerca del número de bienes a los que se ha aplicado la extinción de dominio. Teniendo en cuenta claro está que las cifras no son comparables, que fuentes y metodología son diversas, que lo aportado por la Fiscalía comprende predios rurales y urbanos, etc., y todas las salvedades y atenuantes posibles (¡y las cosas han mejorado, en efecto!) solo para dar una idea de la desproporción a la que nos referíamos antes, pero el caso es que sobre la base de entrevistas a gerentes regionales del Incora, en 1994 Alejandro Reyes, después de sopesar las posibles distorsiones aportaba un estimativo conservador: en 251 de los 1.060 municipios de entonces se había registrado ese proceso de apropiación, y el cálculo de la superficie total arrojaba en cifras redondas tres millones de hectáreas, en tanto que la dependencia del ente acusador, y para todo el período que llevan vigentes las normas respectivas, desde 1996, informa que se han afectado un total de 17.313 bienes, habiéndose producido sentencia sobre 4.933 de ellos<sup>10</sup>. Impresiona más, eso sí, el monto estimado de las operaciones cuando se los convierte a dólares: por lavado de activos: US\$9.347.380.040, por extinción de dominio: US\$25.000.000.000. Cifras gruesas, sobre las cuales no es posible hacer otras inferencias. Las cifras de extinción de dominio habrán de ser un insumo importante para el análisis por muy retrasada que vaya la

---

<sup>10</sup> Las cifras del investigador Alejandro Reyes aparecieron en: *Panorama Observatorio del Narcotráfico*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional N°. 1, enero/abril de 1994, y N°. 2 mayo/agosto del mismo año. Las cifras de la Fiscalía General de la Nación fueron aportadas para este artículo, con fecha 22 de febrero de 2005 por Mónica Mendoza, profesional asistente de la Unidad de Lavado de Activos.

justicia respecto de la dinámica del negocio, pues una vez que ingresa a su sistema el caso, y se tramita, la evidencia es sólida. Pero la desproporción es inmensa: entre 1996 y 2002 solo se había llevado a cabo la extinción de dominio a 344 bienes de narcotraficantes; de ese año hasta el presente se ha hecho extinción de dominio a 1.942 propiedades. Ideal para el análisis sería poder desagregarlas regionalmente y establecer una serie en el tiempo. He ahí que el factor tiempo se convierte en un componente de la negociación, pues dependiendo de la norma que se termine adoptando lo previsible es que haya puja por la aplicabilidad de la norma y la red de testaferrato podría hacerse más intrincada.

### **Un caso regional: el Cesar**

Existen dos trabajos sobre el departamento de Cesar en que se ha estudiado la cuestión de la inseguridad rural y sus efectos económicos. Sin proponérselo, en ambos casos indagando (todo lo sistemáticamente que es posible a un investigador hoy) por la percepción que tienen del contexto regional empresarios de sectores productivos predominantes en el departamento: ganadería y palma africana en 1996 —el trabajo fue publicado un año después—, y algodón, en 2004, se ha llegado al punto de la presencia paramilitar, el grado de control que ejercen y, colateralmente, sus fuentes de financiamiento. Además de la representatividad gremial de quienes fueron entrevistados, y de que las preguntas se centraron en su percepción de la inseguridad, sus efectos económicos y la manera en que los empresarios procuraban adaptarse a ella, tienen la importancia adicional que registran, el primero, un momento en el que hay un equilibrio precario entre guerrilla y paramilitares en cuanto a control territorial y se han incrementado casi todos los indicadores de la violencia; el segundo, el momento en el que los paramilitares han ganado terreno y la guerrilla tiene una presencia apenas periférica. Nos apoyaremos en esos dos trabajos para, mediante un cotejo de sus componentes, captar la dinámica de la guerra, sus efectos económicos y sus costos sociales en una región circunscrita. Para dilucidar así mismo el grado de apoyo que han conseguido los paramilitares y la racionalidad que pueda tener otorgárselo para los agentes de las actividades económicas mencionadas<sup>11</sup>. También, hasta donde

---

<sup>11</sup> En cuanto al primero de los mencionados, ver Jesús Antonio Bejarano *et al.*

la información lo permita, el estimar el impacto de la economía ilegal. Ya es relevante que en los casos de ambas investigaciones la totalidad de los entrevistados hayan pedido el anonimato, y aun cuando se trate de entrevistas focalizadas (una metodología conocida) en uno y otro caso el investigador haya preferido eludir la referencia directa.

En el primero de los trabajos en que nos apoyamos se describe y analiza mediante una somera recapitulación histórica, controlada con un examen de los indicadores de la violencia a partir de cifras consolidadas, la dinámica de la confrontación, en sinopsis apretada, que aquí retomamos para interpretarla en función de nuestro asunto. La correlación que se puede establecer es significativa, y en sus líneas generales es el ciclo que se ha cumplido en otras regiones. Para un departamento como el Cesar, en que a la fecha actuaban cuatro frentes de las FARC y tres frentes del ELN su gradual implantación había traído como secuela en una primera fase un incremento de los asesinatos (puesto que la guerrilla en busca de apoyo por la población ajusticia a cuatrerros y a otros delincuentes) y secuestros. Pues una vez implantados los frentes guerrilleros y cuando ya es posible indicar un grado de adscripción territorial para ellos, ello se traduce en un incremento muy notorio del secuestro, de extorsiones, además de otros delitos: abigeatos, robos y asaltos. En particular el secuestro tuvo índices tan altos que entre los años 1987-1995 pudo calcularse una tasa promedio de «casi 20 secuestros por cien mil habitantes, *superior en más de seis veces la tasa promedio nacional que fue de tres en el mismo período*»<sup>12</sup>. (Y se está hablando de un país en el que ocurre el 45% de los secuestros del mundo, según estimaciones de toda fiabilidad. Fueron los tiempos que de la agenda de Simón Trinidad y de su conocimiento del medio regional salía el listado de los secuestrables). Siguiendo con la recapitulación, viene luego una fase en la que

---

capítulo V: «Estudios de caso: el departamento del Cesar, el Magdalena Medio santandereano y el Urabá» en *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*, Universidad Externado de Colombia; Bogotá, 1997. El segundo de Fernando Bernal «Crisis algodonera y violencia en el Cesar», en *Cuadernos PNUD-Ministerio de Protección Social – Investigaciones sobre el desarrollo social de Colombia*, 2004 (versión electrónica cedida por el autor).

<sup>12</sup> *Op. cit.*, p. 201, el destacado es nuestro.

las autoridades intentan neutralizar a las guerrillas, sin mucho éxito, aun cuando la acción se traduce en el incremento de cifras de homicidios y en un ataque sistemático de la guerrilla a los puestos de policía que va produciendo su paulatino desmantelamiento (en un momento dado solo hay cubrimiento en 21 municipios y seis corregimientos, dejando descubiertos dos municipios y 127 corregimientos) y finalmente, la etapa en la que nos encontramos, en la cual la reacción de los paramilitares hace que se disparen los indicadores de homicidios y asesinatos, a la vez que se registra una drástica disminución de los secuestros. Buscando precisar los efectos, un dato anómalo que aparece es el de que una situación como la descrita no parece afectar el precio de la tierra; más aún a partir de un momento parece incrementarse y el investigador se ve obligado a registrarlos con todas las letras:

Igualmente, los entrevistados sostienen que hay una relación estrecha entre la seguridad y la recuperación de los precios. En algunas de las zonas donde los paramilitares han recuperado terreno con respecto de la guerrilla, hay síntomas muy claros de recuperación del precio de la tierra<sup>13</sup>.

Por su parte, la presencia del narcotráfico es evidente aun cuando cuantificarla, en este tipo de investigaciones, con trabajo sobre el terreno, solo se puede hacer con cifras gruesas, para efectos contables sigue siendo una nebulosa<sup>14</sup>.

Distintos testimonios, y algunos mapas indican durante esos mismos años la propagación de cultivos ilícitos, particularmente en el sur del departamento, y de modo simultáneo, el arribo, provenientes de Córdoba, de embriones de los primeros grupos paramilitares dispuestos a implantarse y expandirse, a favor del clima de inestabilidad e inseguridad existente.

<sup>13</sup> *Op. cit.*, p. 225.

<sup>14</sup> Con cifras agregadas es posible ponderar el peso específico del narcotráfico, como se ha hecho en los trabajos pioneros de Carlos Caballero Argáez, Salomón Kalmanovitz, Francisco Thoumi o Roberto Steiner. Se han adaptado metodologías para estimar su impacto en las cuentas nacionales, en materia de propiedad agraria, en ámbitos departamentales o regionales lo que hay son estimativos indirectos, como el que se citaba arriba de Alejandro Reyes. Para el caso de Cesar, en la investigación reseñada, se cita para el punto, en pie de página, un estudio del Ministerio de Agricultura y una noticia periódica: «Mientras que en el Cesar se han detectado compras de tierras por narcotraficantes en 8 de los 24 municipios del departamento, en otros como en el de Córdoba, la relación es en 22 de 26. Las conclusiones publicadas no incluyen el número de hectáreas por departamento», *op. cit.*, p. 226.

Aun cuando respecto a la procedencia de los primeros grupos, y su relación con las elites locales, los testimonios aportados por el segundo trabajo son contraevidentes. En cuanto a los costos sociales, la realidad, es inocultable: los métodos de implantación son brutales y las cifras de masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento, se disparan, según las propias cifras oficiales. Además de la presunción acerca de inversiones en tierra por parte de los narcotraficantes, se aporta una cifra neta acerca de la expropiación violenta a parceleros del Incora, cuadro elaborado por parte del propio instituto, ente oficial. Una vez más la intimidación es un obstáculo para cualquier precisión o estimación concreta, y debemos conformarnos con el rumor:

El frecuente uso de testaferros hace extremadamente difícil conocer los beneficiarios de estas compras de tierras, aunque se menciona que son los comandantes quienes vienen acumulándolas en un proceso de «relativización»<sup>15</sup>.

Lo menos que puede afirmarse es que los procesos de expropiación de tierras y de implantación de los paramilitares son simultáneos. La acumulación de tierras es la manifestación más concreta de todo un conjunto de actividades depredadoras para hacerse al control territorial a nombre de la lucha por expulsar a la guerrilla de la región. Referencias cifradas en lenguaje bíblico, vetero-testamentario: «un grupo de la sociedad cree en la ley del Talión», y otras alusiones sueltas al modo en que en la sociedad regional hay una actitud del todo permisiva hacia la coerción ilegal que se ejerce van delineando el panorama actual. En principio, siendo foráneos los grupos paramilitares que se establecieron aquí, no contaron con un mínimo de consenso a su favor en el momento de su arribo, su acción retaliatoria no discrimina, pues pretenden posicionarse en poco tiempo y consideran que los excesos cometidos con anterioridad por la guerrilla son su justificación. Lo que se insinúa luego, a medida que sus acciones van debilitando el poder de la guerrilla, es en el fondo una trinidad narcos-paras-políticos locales y regionales.

En todo caso, cuando el segundo de los investigadores lleva a cabo sus entrevistas, la circunspección es mayor, la crisis algodonera ha

---

<sup>15</sup> «Crisis algodonera y violencia en el departamento del Cesar», Fernando Bernal Castillo, *Cuadernos PNUD-MPS*, N.º. 2, 2004, p. 101.

dejado como uno de los efectos el que los gremios se hayan dividido, pero los propietarios no afectados aceptan, con resignación hobbesiana, la presencia paramilitar como un mal menor, *off the record*, claro está. Ahora son los tiempos en que, presentándose como el hombre para la situación, Jorge 40 se ha afirmado ya en el panorama.